

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 11º Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-5059-2020  
**CARATULADO** : VENEGAS/FISCO / CDE

**Santiago, siete de julio de dos mil veintidós.**

**Visto:**

Que compareció don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, abogado, domiciliado en calle Dr. Sótero del Río N°326, oficina 1194, comuna de Santiago, en representación de don **Luis Rafael Venegas Cortés**, empresario, con domicilio en Fuerte Arauco N°3941, comuna de Recoleta, quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **Estado de Chile**, persona jurídica de derecho público, representada por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, abogado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1687, piso 1, Santiago, a fin que se indemnizen los daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos, de los cuales el demandado es civilmente responsable y con ello, se condene al Fisco de Chile a la reparación y pago en concepto de daño moral, por la suma ascendente a \$150.000.000, o la cantidad que se determine, más reajustes, intereses y costas.

En el marco fáctico, sostuvo que la experiencia vivida por su representado se encuentra documentada en reportes oficiales recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), custodiados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Manifestó que don Luis Rafael Venegas Cortes, fue detenido por funcionarios militares del Ejército de Chile, la mañana del día 11 de septiembre de 1973, en las dependencias del Ministerio del Trabajo de la comuna de Santiago, lugar donde se desempeñaba como funcionario público desde el año 1967.

**Relatos del demandante en cuanto a la detención y tortura:** “una vez capturado permanecí junto a otras personas y por algunas horas- como escudo humano ante un ventanal de vidrio que existía en ese entonces hacía calle Teatinos. Desde mis hombros apoyaban las armas para disparar hacia todos lados. Luego fui colocado junto a un grupo de retenidos al



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JGWNXXFBXBG

interior del edificio de los trabajadores en un pasillo, donde escuché tanto los aviones que a baja altura sobrevolaban la Moneda como también- un rato después-el ruido de las bombas disparadas en contra del palacio de gobierno. A continuación, fui conducido al interior de un subterráneo del mismo edificio ministerial. Al salir ya en la tarde del edificio a la calle Huérfanos, me fueron amarradas mis manos por sobre la nuca con gruesas cuerdas y fui llevado en fila de a cuatro personas con rumbo desconocido”.

Continuó señalando en la demanda, que tras la detención de su representado, no fue puesto a disposición de ningún Tribunal de la República, y apenas de su aprehensión material fue trasladado de a pie hacia el Ministerio de Defensa, añadiendo que allí recibió sus primeros golpes e insultos.

Sostuvo que en dicho lugar su representado, fue forzado a arrojar al suelo y le tocó soportar junto a otros detenidos que algunos militares caminaran por sus espaldas.

Destacó que acabó con un par de costillas rotas tras su primer interrogatorio, oportunidad cuando también fue amenazado con armas y recibió puntapiés propinados por militares.

Añadió que a su representado le preguntaban a gritos además de su identificación por la supuesta ubicación de armas escondidas y también sobre su militancia política, sindicado en dicho acto por una nota de prensa televisiva, como parte de un grupo terrorista que había sido desbaratado portando armas de fuego.

En cuanto a la sistematización de la detención y tortura, sostuvo que del regimiento fue transportado hasta el Estadio de Chile, recinto donde permaneció recluido hasta el día 17 de septiembre de 1973.

Recordó la voz de un tal “Príncipe”, quien les informaba a los detenidos que todos se hallaban en ese lugar en calidad de prisioneros de guerra. Le tocó atestiguar las torturas a las que fueron sometidos otros de los detenidos. Recuerda de forma especial un día cuando se seleccionó a quienes fueran profesores dentro del grupo. A ellos se les llevó a un lugar donde se les obligaba a hacer la posición invertida. Cuando uno de los profesores se caía era golpeado con puntapiés y levantado a punta de bayonetas.



Finalmente, fue a dar al Estadio Nacional, recinto donde hubo de permanecer privado de libertad hasta el 16 de octubre de 1973. Fue ubicado en los baños de la escotilla N°6. De allí era sacado para ser interrogado durante varias horas en un lugar que en su memoria se lo representa como una carpa. Recibió golpes en sus oídos propinados con las palmas abiertas de sus interrogadores. Con frecuencia fue amenazado por militares usando sus armas de fuego. Se le consultaba de nuevo por su militancia política y por un supuesto lugar donde se hallarían escondidas las armas. Lo amenazaron de muerte y, en tres oportunidades, fue sometido a fusilamiento simulado. Entre otras cosas, vio como hasta el lugar donde se hallaban los reclusos, llegaba un sujeto encapuchado en compañía de algunos militares y entonces comenzaba la selección de ciertas personas, indicando el encapuchado a quienes, las que luego eran sacadas por los militares y llevadas a un lugar de tormentas. Le tocó escuchar y aún los recuerda gritos de dolor proferidos por otros prisioneros y fue testigo de cómo algunos de sus compañeros pasaban por aquella experiencia de los simulacros de fusilamiento.

Añadió que como consecuencia de los golpes sufrió la ruptura del esternón, problema que se traduce en la incapacidad de pasar mucho rato en ciertas posturas.

Indicó que durante sus días en ese estadio trataba de tomar un poco de sol en las graderías de la referida escotilla. De noche le tocó dormir en el suelo cubriéndose con una frazada aportada por los militares del recinto. Sus familiares no supieron sino hasta pasado quince días y esto gracias a la agencia de la Cruz Roja que él se hallaba como prisionero de ese lugar. Así pudo recibir un poco de ropa de sus parientes.

**Hechos posteriores a la detención y torturas:** Preciso que al recuperar su libertad, regresó a su casa con la instrucción de que debía permanecer en Santiago y que tenía que presentarse en su lugar de trabajo. Al llegar al Ministerio del Trabajo se le informó que su cargo fue dejado vacante, que su sueldo del mes de septiembre fue destinado al proyecto de reconstrucción nacional y, además, fue imputado como uno de los sujetos responsables de aquel ficticio “Plan Z”, en razón de un supuesto hallazgo de ciertos documentos ubicados en el escritorio que ocupaba.



Añadió que mientras se hallaba detenido se gestionó su exoneración política desde el Ministerio del Trabajo. Se dictó la resolución administrativa N°706 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el 17 de septiembre de 1973, suscrita por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, cuya toma de razón por la Contraloría General de la República, sucedió el 19 de octubre de 1973, mediante la cual se declaraban vacantes una serie de cargos de la Subsecretaría del Trabajo y entre otros, se hallaba, por cierto, su cargo donde se desempeñaba en la planta administrativa como un oficial administrativo de sexta categoría.

Hizo presente que la alegría de la libertad del recuento con su familia fue opacada por la cesantía y por el posterior asedio militar que le tocó vivir. Algunos de sus cercanos les aconsejaban pedir asilo en alguna embajada y salir de Chile, pero decidió permanecer aquí, toda vez que no soportaba la idea de salir huyendo como si hubiese sido culpable de algún hecho ilícito.

Manifestó que intentó rehacer su vida trabajando en el campo como agricultor. Junto a su cónyuge vendieron la propiedad que habitaba en Santiago, pensando irse a Huatulame, una localidad ubicada al interior de Ovalle, pero el negocio fracasó, y el dinero obtenido por la venta de su casa sufrió la devaluación propia de la transformación del escudo en peso chileno. Entonces probó suerte en la administración de edificios en Santiago Centro, más otra vez el proyecto no prosperó, toda vez que al ser un oficio insuficiente para cubrir sus gastos, no logró tampoco alejarlo de los seguimientos que todavía le realizaban los agentes de la DINA.

En el año 1978, luego de haber tomado contacto con el obispo Jorge Hourton y la religiosa Carolina Mayer, llegó a trabajar en la fundación "Missio". Por sus servicios en las obras sociales que esta fundación desarrollada en plenos años de dictadura volvió a encontrarse con los agentes de los servicios de seguridad de la época y con ello, de nuevo, los seguimientos, las amenazas con armas, los llamados anónimos por las noches y las advertencias sobre el secuestro de sus hijas. Estos hechos fueron dados a conocer a la vicaría y al parecer fueron objeto de investigación, pero no se logró ni su esclarecimiento ni la identificación ni sanción de los sujetos responsables.



Destacó que todo lo señalado acabó de forma negativa en su familia, ya que sufrió un quiebre matrimonial con su mujer y sus hijas resultaron dañadas en sus emociones.

Precisó que con la caída de la dictadura cesó su trabajo en la fundación. En la década de los años noventa incursionó en algunos emprendimientos privados con poco éxito. En el año 1998 logró llegar a la Dirección del Trabajo en la Inspección de Quilicura, pero al momento de jubilar no pudo acceder a los beneficios de rigor por carecer de la cantidad de años de servicio requeridos por el sistema de seguridad social y por detectarse lagunas impagas en sus años de cotizaciones previsionales.

Hizo presente que desde el año 2014 a la fecha, se desempeña en el área de derechos humanos del Ministerio de Bienes Nacionales.

En el aspecto jurídico, fundamentó su demanda en la circunstancia que los hechos relatados encuadran un episodio de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la asamblea general de Las Naciones Unidas de 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizada con la adopción del estatuto de Roma de la Corte Pelan Internacional aprobada en 1998.

Citó al efecto, sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°4464-01, la que sostuvo que *“resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores[...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito “contra la humanidad o de lesa humanidad”, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional”* (Cifr. I Corte de Apelaciones de Santiago, 16.11.06, *“Ruz y otro con Fisco de Chile”*).

Destacó que la Responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República, en el artículo 38 inciso 2°, reconoce la acción constitucional para hacer efectiva dicha responsabilidad en relación con los organismos del Estado, cuanto éstos, por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. Citó en abono de su



pretensión una sentencia de la E. Corte Suprema dictada en la causa Rol N°3354-03, considerando 11.

Precisó que el fundamento básico de la responsabilidad extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito de derecho público e hizo presente la jurisprudencia de la E. Corte Suprema, emanada, entre otros, de las sentencias dictadas en las causas “Caro con Fisco”; “Bustos con Fisco” y “Albornoz con Ortiz y Fisco”, Roles N°s4004-2003 y 4006-2003.

Señaló que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta insoslayable remitirse al capítulo I de la Constitución Política de la República sobre Bases de la Institucionalidad, donde se desarrollan los principios basales desde donde se estructura el sistema institucional, especialmente artículos 6 y 7 que establecen principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente y que conforman el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Destacó las normas sobre derecho internacional que no han hecho sino que reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En ese sentido, la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos fundamentales se produce en el momento en que Estado actúa en violación de una norma obligatoria; se trata en el caso de una responsabilidad objetiva en donde interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado la que nace al momento en que con su actuar infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor materia del acto y en esa misma línea corre el artículo 19 de la Constitución Política y así las cosas el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia, a través de lo dispuesto en artículo 5° inciso 2° que incorpora la normativa internacional aplicable en la especie. Agrega además lo dispuesto en artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que corre en igual sentido.



Refirió que en el caso sub-lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política de la República, de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; por el contrario, en este caso son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el código Civil toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos que constituyen crímenes de derecho internacional, como los crímenes de lesa humanidad, ya que ambos estatutos difieren en su naturaleza y fines y están destinados a otras conductas e intereses cobrando relevancia los artículos 27 y 28 sobre Convención de Viena sobre derecho de los tratados.

Citó en el caso, el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes se han pronunciado de forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender por la vía de la analogía ciertos conceptos que son propias del derecho civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones de derechos fundamentales. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loayza Tamayo, Reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998, serie C N°42, voto razonado conjunto de los jueces Cancado Trindade y Abreu Burelli, párrafos 7 y 8).

En ese sentido ha fallado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ha señalado que “(...) *tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque éste fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada solo en la segunda mitad del siglo XX*” (Cfr. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, “Carrasco con Fisco de Chile” sentencia de 10 de julio de 2007, Rol N°6715-2002).



Planteó en cuanto a la imprescriptibilidad de las acciones en casos de Responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional, que la materia de qué trata la presente causa queda gobernada bajo normas de carácter público e internacional por sobre las meramente privadas, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino que además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos. En efecto, en todas sociedad democrática y respetuosa de libertades y derechos de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona, derecho que, por lo demás se hallan protegidos por los artículos 4,5 y 7, todos sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Carta fundamental, artículo 19.

Sostuvo que si bien es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del derecho que en el caso de marras orientan al derecho administrativo y en especial al derecho internacional de los derechos humanos, así lo establece el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia.

Concluyó señalando en dicho aspecto, que la comisión de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Se lee en el principio 23 sobre restricciones a la prescripción que, “la prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme al derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación. El fundamento en virtud del cual un Estado quedado obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos





que la conciencia jurídica universal considera intolerables se rige por normas y principios del derecho público y del derecho internacional de los derechos humanos, logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales.

A modo ilustrativo citó jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre casos de responsabilidad del Estado por crímenes de derecho internacional que ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando ésta emana de un crimen de lesa humanidad y/o de un crimen de guerra, en tanto crímenes de derecho internacional lo cual denota un criterio jurisprudencial constante y consistente en la materia, citando al efecto casos como García Guzmán Luis y otros , Rol Ingreso; 4662-2007 de 25 de septiembre de 2008; Secuestro David Urrutia Galaz, Rol Ingreso Corte Suprema, 4691-2007 de 28 de enero de 2009; Ortega con Fisco, Rol 2080-2008 de 8 de abril de 2015; Secuestro de Jaime Rebothamm y Claudio Thaubly, Rol Ingreso Corte Suprema 5436-2010 de 22 de junio de 2011; secuestro Sergio Cádiz y Gilberto Pino, Rol de Ingreso Corte Suprema, de 09 de enero de 2014; episodio Tejas Verdes, Rol de Ingreso Corte Suprema 1424-2013, de fecha 01 de abril de 2014; homicidio calificado de Luis Fidel Arias Pino, Rol Ingreso Corte Suprema 1813-2014, de 02 de septiembre de 2014; Episodio Londres 38, secuestro de Maria Cecilia Labrín, Rol Ingreso Corte Suprema 17037-2013 de 08 de octubre de 2014, entre otros que menciona.

**Daño provocado y monto de indemnización:** En cuanto al daño provocado y el monto de la indemnización refirió que existe un daño de carácter moral que se expresa en el dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que le ha tocado soportar.

Hizo presente que la dolorosa situación a la que ellas se han visto enfrentada configura un claro daño moral que según la dogmática jurídica jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado mediante la indemnización y cita al efecto doctrina nacional de Arturo Alessandri quien define el daño moral como “(...) el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su



calidad de vida”. En cuanto a doctrina comparada cita a autores como José Luis Diez y Ramón Domínguez Águila. En efecto, cita jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en sentencias de 13 de marzo del año 1985 y sentencia de 01 de julio de 1997.

Destacó que es comprensible en el caso de marras que su mandante presente cierta dificultad al momento de proponer ante la justicia alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado. No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que éstos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que se aspiran. Por ello, su parte solicita que se condene a la demandada al pago de la suma de \$150.000.000, (ciento cincuenta millones de pesos) a su representada, a título de indemnización por el daño que se le ha causado como consecuencia directa de los hechos criminales perpetrados en su contra, por parte de agentes del Estado De Chile, o bien, lo que la judicatura determine en justicia.

Agregó que la cantidad demandada, deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de deducción de la demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales respectivos durante el mismo período y las costas de la causa.

Mediante resolución de 7 de mayo de 2020, se tuvo por rectificada demanda en cuanto a la representación legal de la demandada.

Por escrito de 14 de julio de 2020, compareció doña **Ruth Israel López**, abogada procuradora Fiscal de Santiago, del **Consejo de Defensa del Estado, Fisco de Chile**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, Santiago, quien contestó la demanda civil de indemnización de perjuicios y solicitó su rechazo, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En primer lugar, opuso la **excepción de cosa juzgada**, conforme a lo dispuesto en los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

Precisó que el actor dedujo demanda de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago,



bajo el Rol N° C-1890-2006, caratulado “Salgado y otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios por daño moral, apareciendo como demandante en página 27 de la demanda.

Manifestó que en el presente caso, concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que don Luis Rafael Venegas Cortés, demandó al Fisco de Chile, por supuesta responsabilidad extracontractual, por las torturas y apremios ilegítimos, ocurridos en septiembre de 1973.

Añadió que dicha demanda fue rechazada por sentencia de primer grado, de 5 de julio de 2011, al ser acogida la excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil, opuesta por el Fisco y que fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol de ingreso Corte N°7649-2011, el 19 de enero de 2014.

Agregó además, que la Excma. Corte Suprema, por sentencia de 19 de noviembre de 2014, y bajo el Ingreso N°7.888-2014, rechazó el recurso de casación en el fondo por dicho demandante.

En el aspecto jurídico, fundamentó su alegación en las disposiciones de los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

Alegó en subsidio, la **excepción sobre reparación integral e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.**

Sostuvo que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelaron que tras toda la reparación, existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, y dicho concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe, normalmente, en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación propusieron como programa de reparación.

Añadió que los programas incluyeron beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, por lo que no es un secreto que las transiciones han estado en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, y basta para ello, revisar las



discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123, para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego.

Expresó, en palabras de Lira, que los objetivos a los cuales se abocó, preferentemente, el gobierno del Presidente Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron, a saber:

- a) El establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura;
- b) La provisión de reparaciones para los afectados y
- c) El favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Indicó que la Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamado comisión Rettig, en su informe final formuló una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud, añadiendo que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley N°19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro en el sentido que por él se buscaba, en términos generales, reparar, precisamente, el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Agregó que la comisión entendió como reparación, “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”, y que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”.

Manifestó que en la discusión de la Ley N°19.123, el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, a modo de ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto.

La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También estuvo presente en



la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación.

Indicó que la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le correspondería especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas”, a que refiere el artículo 18.

Hizo presente que la Ley N°19.123 y las demás normas conexas, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella, una síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Precisó que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derecho sobre prestaciones estatales específicas y c) reparaciones simbólicas.

Agregó que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Planteó que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destacó que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Hizo presente que este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, en estos conceptos, las siguientes cantidades:

**a)** Pensiones, por la suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N°19.123;

**b)** pensiones por \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N°19.992;



c) Bonos, por la suma de \$41.856.379.416 asignada por la Ley N°19.980 y \$22.205.934.047, por la Ley N°19.992;

d) desahucio por la suma de \$1.464.702.888, asignado por medio de la Ley N°19.123 y

e) Bono extraordinario por la suma de \$21.256.000.000, por lo que a diciembre de 2015, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

Añadió que, siguiendo una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual, y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Destacó que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, la que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas.

Expresó que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consignó que el actor recibió en forma reciente el aporte único de reparación de la Ley N°20.874, por la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos), por lo que ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionados.

Estableció que la reparación no se realizó solo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU ha señalado que el objetivo del programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.



Por ello, es que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N°19.234, como de la Ley N°19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país.

Hizo presente que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa.

Añadió que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios y superiores y el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A su vez, se concedieron beneficios de vivienda, correspondiente al acceso subsidios de vivienda.

Hizo presente y destacó, además, todas las reparaciones simbólicas, entre otras, la construcción del memorial, mediante el Decreto N°121 sobre el día nacional el detenido desaparecido, construcción de museos de memoria y derechos humanos, Premio Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Señaló que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente ha apuntado a compensar a víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales.

**En subsidio, opuso la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en artículo 2332 del Código Civil, en relación con artículo 2497 del cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.**

Indicó que la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió a partir del 11 de septiembre de 1973.

Añadió que siendo el caso que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, basta



la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, ello es, el 25 de junio de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

**En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515, en relación al artículo 2514 del Código Civil**, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la atendida fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2515.

Planteó que todos los derechos y acciones son prescripciones, y como tal, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Expresó que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Añadió que efectivamente las normas del Título XLII del libro IV del Código Civil, que la consagran, y en especial, párrafo I, se ha estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas, está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra un carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares, la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Refirió que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe duda renunciarla anticipadamente, por lo que la responsabilidad que se le atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir extra patrimonialmente a través de un incremento patrimonial del afectado.

Citó como abono a su alegación, sentencia de la Excm. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, en donde se zanjó que el principio





general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad y diversas convenciones internacionales sobre la materia.

**Subsidiariamente y en cuanto al daño e indemnización reclamada**, alegó con relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en la demanda y de acuerdo a los antecedentes que obren en autos, por lo que los llamados daños no patrimoniales no recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniario ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Agregó que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

En subsidio, **alegó que en la fijación del daño moral por los hechos de autos se deben considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado**, conforme a las leyes mencionadas y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto la reparación del daño moral, añadiendo que de no accederse a ello implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Alegó, además, que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostuvo que a la fecha de la deducción de la demanda a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.



Hizo presente que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Señaló que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Hizo presente el artículo 1551 del Código Civil, cual establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por escrito de 24 de julio de 2020 la demandante evacuó el **trámite de la réplica** y señaló, en cuanto a la alegación de pago o de “reparación satisfactiva o integral”, en consideración a que el demandante, ya ha sido indemnizado en virtud de la ley 19.123, y por los beneficios pecuniarios percibidos por las leyes N° 19.234 y N° 19.992 le parece errado, ya que en el mejor de los casos, los montos otorgados sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. En ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Expuso que, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible y por ello no cabe acoger la excepción alegada.

Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.

En definitiva, explica que las diferentes leyes de reparación han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación.

En relación con la excepción de **cosa juzgada**, por la demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco ante el 14° Juzgado Civil



de Santiago, bajo el Rol N° C-1.890-2006, caratulada “Salgado y otros con Fisco de Chile”, precisa que no se debe acoger la excepción de cosa juzgada por ser contraria al Derecho Internacional. De igual modo, considera que la estimación de la excepción analizada, genera una afectación al derecho de igualdad reconocido en los artículos 1° y 19 N° 2 y N° 3, ambos de la Carta Fundamental, puesto que el demandante de autos, don Luis Rafael Venegas Cortés, en tanto víctima de un crimen de Derecho Internacional, no podría ser reparado, y sin embargo, incontables víctimas de crímenes de esta especie lo han sido.

Aclaró el concepto de víctima para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en particular, ante situaciones que constituyen crímenes de Derecho Internacional. Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el concepto de víctima es: *“(…) se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”* (Principio V.8. de la Resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de 16 de diciembre de 2005).

De la definición transcrita, concluyó que el actor es una víctima de crímenes de Derecho Internacional.

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones en que puede incurrir el Estado de Chile, en materia de Justicia Transicional, expuso que el Estado de Chile, ante los hechos criminales que ocurrieron en el contexto



de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidos durante el tiempo en que se desarrolló en el país la dictadura, que son constitutivos de crímenes de Derecho Internacional, debe cumplir determinadas obligaciones internacionales, cuales son, (i) el deber de investigar los hechos, (ii) el deber de sancionar a los responsables, (iii) el deber de reparar a las víctimas –directas e indirectas-; y, (iv) el deber de garantizar la no reiteración de los hechos.

Precisó que las obligaciones internacionales antes referidas tienen por fundamentos fuentes jurídicas de carácter convencional y de carácter consuetudinario. En cuanto a fuentes jurídicas convencionales, debemos citar, por ejemplo, las convenciones temáticas sobre tortura, de los sistemas universal e interamericano de protección de Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras. En cuanto a las fuentes jurídicas consuetudinarias, citó normas de *Ius Cogens* que prohíben los crímenes de lesa humanidad y, además, que establecen las obligaciones internacionales ya citadas en el párrafo anterior.

Correlativamente a las obligaciones estatales indicadas, existen derechos de las víctimas, entre los que se deben mencionar el derecho a la Verdad; el derecho a la Justicia; el derecho a la reparación que asiste a las víctimas y a la sociedad toda; y, el derecho a la adopción de Garantías de no repetición de crímenes de Derecho Internacional.

Precisó, en relación al deber de reparar a las víctimas de crímenes de Derecho Internacional y el correlativo derecho a la reparación que asiste a las mismas, que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se verificaron en Chile, graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Dichas violaciones a los derechos humanos a nuestros compatriotas, afectaron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad personal, el derecho a la protección judicial, el derecho a las garantías judiciales, entre otras facultades subjetivas de la persona, inherentes a ella por su condición de tal, reconocidas y garantizadas por nuestra Carta Fundamental de 1980, y asimismo, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y que integran el acervo



normativo del sistema interamericano de protección de derechos humanos y del sistema universal de protección de derechos humanos.

Refirió que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar tales derechos humanos. Si incumple tales obligaciones, el Estado incurre en una infracción a una obligación internacional que le es atribuible, generándose, por tanto, la responsabilidad internacional del Estado infractor.

Destacó que la excepción de cosa juzgada invocada por la demandada; que emana de la sentencia de primera instancia dictada por el 14° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la tesis de la prescripción de la acción civil, y que fue confirmada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 19 de enero de 2014, y más tarde, la Excma. Corte Suprema, el día 19 noviembre del mismo año, al declarar inadmisibile el recurso de casación promovido por la parte demandante, sentencias en virtud de las cuales se denegó la demanda civil indemnizatoria impetrada por el demandante, invocando normativa interna para justificar tal decisión; **dado que nos enfrentamos a una cosa juzgada aparente, por cuanto con dicha alegación se pretende incumplir una particular obligación internacional de reparación de una víctima de un crimen de Derecho Internacional que tiene el Estado de Chile**, denegando el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial que asisten a una persona, reconocidos en los artículos 8 y 25, respectivamente, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en este particular caso, insistimos, a una víctima de crímenes de Derecho Internacional.

La cosa juzgada aparente que emana de una decisión jurisdiccional del Poder Judicial de un Estado, que se funda en la invocación y aplicación en el fuero interno de normativa interna contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que debe observar el Estado, no puede constituir un obstáculo para el cumplimiento de la obligaciones internacionales que, en materia de Justicia Transicional, tiene nuestro país.

**En cuanto a la afectación del derecho general de igualdad contenido en la Carta Fundamental en que puede incurrir la sentencia definitiva**, precisó que todas las sentencias pronunciadas por la Excma. Corte Suprema, citadas en extenso en el escrito de demanda acogieron las respectivas demandas indemnizatorias de perjuicios promovidas en favor



los familiares de víctimas, y víctimas directas, de crímenes de esta naturaleza, ordenando indemnizar el daño causado a ellas, esgrimiéndose, entre otros argumentos, la obligación internacional de reparar a las víctimas de estos crímenes de Derecho Internacional.

**Respecto a la excepción de prescripción extintiva**, sostuvo que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil, afirmación errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Corte Suprema, citando abundante jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Al evacuar el **trámite de la dúplica** y en relación con la excepción de la cosa juzgada, la demandada precisó que el actor **no controvierte la excepción de cosa juzgada alegada por el Fisco**, reconociendo la existencia de la sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento judicial donde existe identidad legal de personas, de la cosa pedida y de la causa de pedir. Refirió que concurren los presupuestos legales que hacen concurrente la cosa juzgada respecto de la demanda deducida por los actores. Sin embargo, el actor se limita a desconocer los efectos y consecuencias que tienen las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios chilenos, desconociendo de paso el carácter jurisdiccional de los jueces de letras, llamados a resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, de acuerdo a la Constitución Política de la República.

Alegó que resulta improcedente la aplicación de la cosa juzgada, en atención a que la materia de autos dice relación con acciones indemnizatorias fundadas en delitos de lesa humanidad, existiendo normas de derecho internacional que prevalecerían por sobre la institución de cosa juzgada.

Al respecto, cabe señalar que la cosa juzgada se considera, clara y explícitamente, como uno de los efectos de la sentencia, o como su específica eficacia, para que aquellos a quienes aprovecha el fallo “*impidan*,



*definitiva o irrevocablemente, todo pronunciamiento posterior, sea en el mismo u otro sentido, esto es, con idéntico o diverso contenido y en el mismo o en otro proceso (exceptio res iudicata), concurriendo los presupuestos, requisitos, condiciones y modos correspondientes y, muy en especial, la triple identidad de que trata el ya citado artículo 177 del Código de Procedimiento Civil chileno” (Hoyos H., Francisco, “Temas fundamentales de Derecho Procesal”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987, p. 195).*

Pues bien, el demandante pretende restar eficacia absoluta y autoridad a la sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento anterior y obtener en un nuevo juicio un pronunciamiento favorable, concurriendo en ambas causas identidad legal de personas, cosa pedida y causa de pedir. Lo solicitado resulta del todo improcedente, sin perjuicio de las motivaciones que indica el actor, pues el mandato de una sentencia, una vez firme, no puede ser modificado o dejado sin efecto, salvo casos muy excepcionales como el recurso de revisión en materia penal, cuyo no es el caso.

A mayor abundamiento, sostuvo que reconocer lo señalado por el demandante significaría ignorar la autoridad de los fallos que la Excm. Corte Suprema ha dictado en esta materia, desconociendo el valor jurídico de sus sentencias y en definitiva atentando en contra la certeza jurídica.

**Agregó que para el derecho internacional la cosa juzgada también es una institución fundamental.** La cosa juzgada es una institución antigua en el derecho nacional y también en el derecho internacional. Desde antiguo las Cortes Internacionales han reconocido la cosa juzgada como un elemento esencial de los sistemas jurídicos tanto domésticos como internacionales. La Corte Internacional de Justicia lo tiene entre aquellos principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas

Mediante resolución de 5 de agosto del año 2020, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

**1. Efectividad de haber sido detenido en forma ilegal don Luis Rafael Venegas Cortés por Agentes del Estado. 1.1. En la afirmativa: fecha, lugar y**



circunstancias; **1.2.** Torturas, lesiones corporales y demás actos vejatorios aplicados al demandante;

**2.** Si el demandante o algún pariente ha recibido algún bono, pensión y/o cualquier otra transferencia directa de dinero consagrada por la Ley N°19.123, Ley 19.980 o cualquier otra normativa establecida al efecto. Fecha, monto y beneficiario(s);

**3.** Existencia y naturaleza del daño invocado por la actora;

**4.** Estado procesal, materia y partes en la causa C1890-2006 caratulada Salgado y Otros con Fisco de Chile, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago.

Por resolución de **3 de enero de 2022**, se citó a las partes a oír sentencia.

**Considerando:**

**Primero:** Que ha comparecido don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, en representación de don **Luis Rafael Venegas Cortés**, y dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **Estado de Chile**, persona jurídica de derecho público, representada por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, a fin que se indemnicen los daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos, de los cuales el demandado es civilmente responsable y con ello, se condene al Fisco de Chile a la reparación y pago de la cantidad de **\$150.000.000**, por daño moral o la cantidad que se determine, más reajustes, intereses y costas.

Fundó su demanda de indemnización de perjuicios en los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

**Segundo:** Que la demandada se opuso a la acción indemnizatoria, basando su solicitud de rechazo en la excepción sobre cosa juzgada; en subsidio, la reparación integral e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante; opuso la excepción de prescripción extintiva, en relación a la indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en artículo 2332 del Código Civil, en relación con artículo 2497 del cuerpo legal; en subsidio, opuso la excepción de prescripción ordinaria del artículo 2515, en relación al artículo 2514 del Código Civil. En subsidio, sostuvo que la regulación del daño moral debe





considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos que establecen los tribunales y, finalmente, alegó la improcedencia del pago de reajustes e intereses, las que funda en alegaciones de hecho y de derecho ya expuestas en la parte expositiva de este fallo.

**Tercero:** Que conforme a las reglas de la carga de la prueba, es inconcuso que incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o éstas, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1698 del Código Civil.

**Cuarto:** Que antes de adentrarnos a las alegaciones exhibidas por la demandada, corresponde determinar, como punto de partida de la primera de las alegaciones de la demandada, si en el caso se dan los supuestos sobre cosa juzgada alegada.

**Quinto:** Que la excepción de cosa juzgada encuentra su regulación en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, sostiene la referida norma que:

*“La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y para todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:*

*1° Identidad legal de personas;*

*2° Identidad de la cosa pedida; y*

*3° Identidad de la causa a pedir-*

*Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”.*

**Sexto:** Que con el objeto de acreditar la excepción en estudio, la demandada acompañó al proceso los siguientes medios de prueba, a saber:

**1.** Demanda seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol N°1890-2016, caratulado “Salgado y otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios, que en página 27 hace referencia al actor.

**2.** Sentencia de 19 de noviembre de 2014, en autos rol 7888-2014 sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, caratulada “Salgado con Fisco de Chile”, pronunciada por la Excma. Corte Suprema de Santiago;



3. Sentencia de 5 de julio de 2011, dictada en causa rol C-1890-2016, caratulada “Salgado Salgado Juan/ Fisco de Chile”, la que en páginas 27 y 469 hace referencia al actor.

4. Cúmplase de 10 de enero de 2014, que confirma sentencia de cinco de julio de 2011.

**Séptimo:** Que esta institución ha sido objeto de los más variados estudios por parte de destacados procesalistas. Sin embargo, es la doctrina moderna la que ha delimitado de manera más correcta esta institución jurídico - procesal, estableciendo sus principios básicos y efectos. Sobre el particular, se ha señalado que *“el principio básico del que parte el concepto de cosa juzgada es el siguiente: Los juicios sólo deben realizarse una única vez. De donde se deriva que la cosa juzgada en una prohibición de reiteración de juicios. Ese fue el postulado en época de Hammurabi, ese era el postulado en época romana, y ese es y seguirá siendo el postulado del que la cosa juzgada partirá en todo caso.*

*“La razón de ello es muy evidente, y puede resumirse de este modo: la seguridad jurídica requiere que sobre cada asunto solamente pueda decidirse una única vez. La jurisdicción existe para dar fijeza y seguridad a las relaciones humanas conflictivas”* (v. Nieva Fenoll, Jordi, *La Cosa Juzgada*, Editorial Atelier, Barcelona, 2006, pp. 119-120).

A partir de lo expuesto, podemos concluir que la cosa juzgada, en tanto, resistencia contra el nuevo juicio, importa una limitación al derecho, que por regla general tienen las partes para postular acciones de toda clase. En efecto, su objeto es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias en que ya ha recaído una decisión, reconociéndose un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá una completa certeza, “impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto”. (Excma. Corte Suprema, Rol N°20.520-2018, de 14 de noviembre de 2019).

Sin embargo, Guasp Delgado al publicar su meritorio trabajo sobre los límites temporales de la cosa juzgada, fue probablemente el primero en España en intentar destacar la relevancia del tiempo para la cosa juzgada de las resoluciones judiciales. Pero, sin embargo, por más que el título de su estudio induzca a pensar lo contrario, finalmente lo que demuestra su



trabajo, que no es poco, es que la cosa juzgada de las resoluciones judiciales no tiene una eficacia eterna, sino que las circunstancias que motivaron un determinado fallo jurisdiccional cambian con el paso del tiempo (v. Guasp Delgado, Jaime, *Límites temporales de la cosa juzgada*, en *Anuario de Derecho Civil*, 1948, pp. 435 y ss.).

En el presente caso, debemos analizar si los efectos de la cosa juzgada impiden que el actor pueda ejercer su derecho, nuevamente, con la finalidad de obtener la reparación pretendida con ocasión de la vulneración sufrida en relación a su integridad y derechos humanos.

**Octavo:** Que, en primer término, la excepción de cosa juzgada deberá ser rechazada utilizando como criterio y herramienta jurídica el denominado “control de convencionalidad”, institución que busca que los Estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (CADH) o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta doctrina que emana del Control de Convencionalidad exige que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional cuando la misma resulte contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos o a la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana, siendo este el último caso que este sentenciador abordará.

En efecto, a partir del dictado de la sentencia recaída en el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, de 29 de noviembre de 2018, específicamente, para nuestro país, se estableció que “El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (...)”. El fundamento de la condena del Estado de Chile, y las medidas de reparación que se dispusieron en el fallo, descansa, precisamente, en la errada aplicación de la prescripción civil ordinaria en relación con las acciones civiles tendientes a indemnizar a las víctimas de derechos humanos.

En este punto, el fallo en estudio señaló que:

*“76. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal se ha referido al amplio contenido y alcances del derecho de acceso a la justicia, en el marco de los*



*derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.*

*77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisibles e inaplicables la prescripción [penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas.*

*78. En relación con lo anterior, este Tribunal es consciente de los desarrollos que existen en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.*

*79. Así, desde 1989 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló, en sus Observaciones Generales respecto del artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las ‘acciones civiles de indemnización no [...] estarán sujetas a la prescripción’.*

*80. El entonces Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló que ‘[...] la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes [...] son el resultado de los crímenes más odiosos que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha*



*provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo’.*

*81. El Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyó lo siguiente:*

*Principio 23. Restricciones a la prescripción. La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación. [...]*

*Principio 32. Procedimientos de reparación. Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23.*

*82. En 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Los principios 6 y 7 de dicho instrumento indican:*

*6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.*

*7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.*



83. Asimismo, tal como indicó la Comisión, existen algunos desarrollos en la materia en el derecho comparado en ciertos países. Por ejemplo, el Consejo de Estado de Colombia ha emitido múltiples sentencias en que ha inaplicado el plazo de dos años de caducidad de acciones reparación directa contra el Estado, cuando se trata de daños ocasionados por la comisión de un crimen de lesa humanidad, ponderando entre la seguridad jurídica –que buscan proteger los términos de caducidad– y el imperativo de brindar reparación del daño ocasionado en este tipo de delitos:

*Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales.*

*[...] Todo lo anterior sin perjuicio de las excepciones que ha elaborado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha advertido que los hechos que sustentan el medio de control de reparación directa admiten su encuadramiento como un acto de lesa humanidad [...]*

*Así, se tiene que los de lesa humanidad se comprenden como ‘aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad’ [...]*

*Ahora bien, la importancia del concepto de lesa humanidad para el ámbito de la responsabilidad del Estado consiste en predicar la no aplicación del término de caducidad en aquellos casos en donde se configuren tales elementos, pues, siendo consecuente con la gravedad y magnitud que tienen tales actos denigrantes de la dignidad humana, es que hay lugar a reconocer que el paso del tiempo no genera consecuencias desfavorables para quienes (de manera directa) fueron víctimas de tales conductas y pretenden la declaratoria de responsabilidad extracontractual*



*del Estado por los daños antijurídicos irrogados en su contra; pues resulta claro que allí no solo se discuten intereses meramente particulares o subjetivos sino también generales que implican a toda la comunidad y la humanidad, considerada como un todo.*

*En consecuencia, entiende el Despacho que en aquellos casos donde se encuentre configurado los elementos del acto de lesa humanidad o que generen posibilidad que así sea tratado, habrá lugar a inaplicar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, conforme a lo expuesto.*

*(...)*

*85. Asimismo, tal como lo hicieron notar la Comisión y el propio Estado, la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado sustancialmente, declarando en numerosos casos concretos la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa humanidad, integrando para ello argumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.*

**Noveno:** Que la jurisprudencia internacional reproducida en el motivo precedente, entendida como la doctrina que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto de relieve que la aplicación del estatuto de la prescripción de las acciones de reparación patrimonial derivada de los delitos de lesa humanidad resulta inadmisibles, habiendo incurrido nuestro país, en responsabilidad internacional por dicha forma errada de interpretar el Derecho y hacer aplicable estatutos jurídicos totalmente disímiles a la interpretación que viene sosteniendo la referida Corte en asuntos derivados de dicha reparación patrimonial y que subyace, con ocasión de los ilícitos cometidos agentes del Estado en tiempos de dictadura, los que son calificados como crímenes de lesa humanidad.

**Décimo:** Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol principal en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Consciente de su papel, la Corte busca tener un amplio impacto en el panorama de los derechos humanos en el Hemisferio, para lo cual desarrolló la doctrina del *control de convencionalidad*, que busca expandir el efecto de sus sentencias. En términos generales, esta doctrina es algo similar a la idea de control de constitucionalidad, pero con varias diferencias



clave, principalmente, su aplicación en el ámbito del Derecho internacional (v. Paúl Díaz, Álvaro, *Los enfoques acotados del control de convencionalidad: las únicas versiones aceptables de esta doctrina*, en Revista de Derecho (Concepción), vol. 87, N°246, dic. 2019).

No está demás decir que esta fuente del derecho internacional nació, a propósito de otro incumplimiento internacional por parte del Estado de Chile, esta vez, en el caso *Almonacid Arellano vs. Chile*.

Por lo anterior, si se realiza el debido contraste entre la doctrina que emana del fallo internacional antes citado con el caso *sub judice*, queda de manifiesto que resulta inadmisibile darle a la cosa juzgada el valor que pretende la demandada, ya que dicha institución cede ante las fuentes del derecho internacional, dentro de las cuales, se encuentra la sentencia del Caso Órdenes y otros vs. Chile, que señala la improcedencia de la referida prescripción, institución fundante de la cosa juzgada alegada.

**Undécimo:** Que, además, **existe otro argumento que permite restarle valor a la cosa juzgada alegada por el Fisco de Chile y dice relación con el choque o colisión entre normas del derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno**, específicamente, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, lo que a la luz del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, exige que no se pueda invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

En este punto, hay que poner de relieve que el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: *“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”*.

Por su parte, el artículo 63.1 de dicho instrumento internacional se preceptúa que: *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá*





*asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.*

En relación con los efectos de la prescripción, que emanan de la cosa juzgada invocada, resulta pertinente, además, la disposición contenida en las letras a) y d) del artículo 29 de dicha Convención, la que establece, a propósito de las reglas de interpretación de dicho instrumento internacional que: *“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:*

*a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, **suprimir** el goce y **ejercicio de los derechos** y libertades **reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;***

*(...)*

*d) **excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.***

**Duodécimo:** Que, del análisis armónico de dichos preceptos internacionales, se desprende que el estatuto de la prescripción no resulta conciliable con las disposiciones de la Convención, máxime cuando los derechos humanos son concebidos como el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Dentro de sus características se conciben como universales, indivisibles, inalienables, **imprescriptibles**, no pueden ser suspendidos o retirados, imponen obligaciones a los Estados y sus Agentes, entre otras.

Así las cosas, existiendo clara noticia que respecto del demandante se ha incurrido en responsabilidad en cuanto a ser víctima de una violación a sus derechos humanos, como se desprende de la Fichas Valech, nació para el Estado la obligación de reparación. Si bien, el Fisco dentro de sus alegaciones subsidiarias, reconoce dicha reparación por medio de las Leyes que señala, al articular una defensa basada en la cosa juzgada, lejos de reconocer su responsabilidad en los hechos, revictimiza al demandante, pretendiendo privarlo de la posibilidad de consumir el principio de



reparación integral, máxime en su condición de víctima de delitos de lesa humanidad.

Este sentenciador entiende que la institución de la cosa juzgada reconocida en el artículo 177 del Código Adjetivo, cede frente a las normas internacionales antes citadas, ya que ante el conflicto normativo que existe entre la imprescriptibilidad de las normas de derechos fundamentales, versus una norma adjetiva o procesal que pretende impedir la mera reiteración de juicios, fundada, por lo demás, en una interpretación que el propio Estado de Chile reconoció ante la Corte Interamericana como injusta en el caso Órdenes y otros con Chile, hace plenamente aplicable el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Los Tratados y en consecuencia, resulta inaplicable, por ir contra el Derecho Internacional analizado previamente.

**Décimo tercero:** Que, por último, no podemos perder de vista que la cosa juzgada alegada solo descansa en una decisión adjetiva, fundada en una alegación de prescripción. El ejercicio de la jurisdicción en el caso fundante de la cosa juzgada, no revisó los hechos del juicio ni valoró la prueba rendida, motivo por el cual, los efectos de la sentencia más bien se circunscriben a una cuestión de orden temporal que, como ya hemos visto, resulta impertinente a la luz del derecho internacional.

Cuando hablamos de cosa juzgada se requiere que exista la denominada “triple identidad”, siempre bajo el presupuesto que la fase de conocimiento y juzgamiento de la jurisdicción se agotaron y consumaron, estableciendo los hechos del juicio sobre la base de las pruebas rendidas, cuestión que no ocurre en la sentencia fundante de la excepción.

Por ello, resulta plenamente aplicable aquella doctrina que reconoce la necesidad de que los juicios sean inamovibles, salvo en los casos en que se produzcan errores o injusticias manifiestas, que tanto daño hacen al ordenamiento jurídico (Nieva Fenol, Jordi, ob. cit., pp. 82 y 83). Y esta injusticia, precisamente, se produce en el caso sub judice, no sólo porque la decisión fundante de la excepción atenta contra el derecho internacional, sino porque la reciente jurisprudencia uniforme de nuestro máximo tribunal, reconoce la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad.



En este punto, a juicio de este sentenciador, cobran especial y sensible sentido las palabras del maestro Couture en su obra “Los Mandamientos del Abogado”, al señalar: *“Lucha: Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”*.

Es evidente que este es uno de aquellos casos en que la letra fría de la ley se aleja del espíritu que precisamente pretende alcanzar: la justicia, valor fundamental de la paz social; y para ello, debemos recurrir al mismo texto normativo para alcanzar el fin que en algún momento se desvió, sin que por ello caigamos en decisiones fuera del ordenamiento jurídico que nos rige.

**Décimo cuarto:** Que, por todo lo razonado previamente, la excepción de cosa juzgada ha de ser desestimada.

**Décimo quinto:** Que antes de adentrarnos a las alegaciones subsidiarias opuestas por la demandada, corresponde acreditar la existencia o no de los presupuestos fácticos que causaron al actor apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado en tiempos de la dictadura militar.

**Décimo sexto:** Que a tal efecto, el actor acompañó a la causa, la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

a) Copia simple de los documentos reunidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y atinentes al Sr. Venegas Cortés, en el proceso de reconocimiento en su calidad de víctima de violaciones de sus derechos humanos, todos ellos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, actual custodio y guardador de la referida documentación. En concreto, se trata de los siguientes documentos:

b) Certificado emitido por don Leonardo Urrutia Álvarez, del área de memoria, archivos y documentación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, suscrito en Santiago de Chile el día 26.12.2019, mediante el cual se expresa que don Luis Rafael Venegas Cortés se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la “Comisión nacional sobre prisión política y tortura”.

c) Certificado de 9 de septiembre de 2019, suscrito por doña Beatriz Contreras Reyes, Jefa de la Sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través del cual se entrega una copia



simple de la página N° 624 de la nómina de víctimas calificadas de la prisión política y tortura en donde se lee el nombre del Sr. Venegas Cortés.

**d)** Copia simple de la ficha de ingreso de preso político y/o torturado, fechado al día 02.04.2004, atinente al Sr. Venegas Cortés.

**e)** Copia simple de la “Relación de prisioneros” reclusos en el Estadio Nacional, donde se halla el nombre del Sr. Venegas Cortés.

**d)** Copia simple de la resolución administrativa N° 706 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del día 17.09.1973, suscrita por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, mediante la cual se declaraba vacante la función que el Sr. Venegas Cortés desarrollaba en la Subsecretaría del Trabajo.

**e)** Copia de Informe denominado “Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, de fecha 6 de diciembre del año 2010, suscrito por la directora ejecutiva Elena Gómez Castro, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS.

**f)** Certificado de nacimiento del actor, Rafael Venegas emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y copia de su cédula de identidad.

**e)** Diversas sentencias emanadas de Tribunales Superiores, relacionadas con la imprescriptibilidad de las acciones civiles.

**Décimo séptimo:** Que de los antecedentes referidos precedentemente, valorados conforme las reglas establecidas en los artículos 1700 y 1702 del Código Civil, es posible tener por acreditado que don Luis Rafael Venegas Cortés, se encuentra calificado como víctima en el Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I.

Por otro lado, conforme da cuenta el Decreto Exento N°706 de 17 de septiembre de 1973, se declaró vacante a partir de esa fecha, el cargo de planta administrativa que detentaba el actor, en su calidad de Oficial Administrativo 6° categoría, en la Subsecretaría del Trabajo.

En la ficha de prisionero político, se da cuenta que el actor fue detenido en el Ministerio del Trabajo y dejado en el Hall del Ministerio de Defensa, tendido en el piso, donde fue golpeado y caminaron por encima suyo, siendo interrogado sobre su militancia política. Luego fue trasladado al



Estadio Chile, siendo interrogado y amenazado de muerte si no entregaba la información requerida, haciéndose un simulacro de fusilamiento.

Producto de un golpe le fracturaron el esternón que hoy en día le impide estar mucho tiempo derecho requiriendo de una operación.

Por otra parte, la propia prueba de la demandada ilustra a este tribunal en el sentido que el demandante calificó como víctima de delitos de lesa humanidad, por cuanto obtuvo beneficios de reparación Leyes N°s 19.234, 19.992 y 20.874, recibiendo un total al 26 de noviembre de 2021, de \$49.354.767, sobre la base de una pensión mensual de \$187.969.

Otro instrumento que da luces sobre los efectos de las vivencias de los detenidos y torturados ilegítimamente es el informe sobre víctimas de violaciones a los derechos humanos, que señala: “las personas que han sido sometidas a este tipo de traumatizaciones sufren un daño psicológico que les impide integrar en su personalidad consciente la experiencia que les ha sobrevenido. La experiencia traumática ocasiona una desestructuración de tal magnitud que las consecuencias de estas situaciones provocan y afectan todos los ámbitos de la vida de los sujetos que las sufren tales como lo personal, lo familiar y lo social por lo que el daño y las defensas desarrolladas se incorporan inicialmente en la reorganización frente al trauma”.

Si bien el informe es más extenso, aborda los efectos para casos no relacionados con el presente juicio, donde la víctima está presente y es quien reclama la indemnización por los daños ocasionados.

**Décimo octavo:** Que para determinar la entidad del daño producido, prestaron declaración en estrado don **Luis Mariano Alorda Rivera**, quien expuso que el acto era funcionario del Ministerio del Trabajo al 11 de septiembre de 1973, fue detenido y lo trasladaron al Estadio Nacional, estando en ese recinto un buen tiempo, sin cargo alguno y en forma arbitraria. Fue exonerado de su cargo y trabajo, quedando cesante, y por ello tuvo que vender su casa en Santiago trasladándose al norte para realizar algunos emprendimientos, volviendo posteriormente a Santiago desarrollando labores en la Feria Lo Valledor sufriendo un perjuicio económico por perder su trabajo, además de todos los perjuicios psicológicos para él y su familia.



El testigo conoce al actor por 52 años, precisando que sufrió diversos vejámenes, padecimientos, golpes, falta de alimentación, quedando en condiciones deplorables y sufriendo torturas psicológicas, ya que en el Estadio Nacional, pasó por dichos vejámenes y torturas.

Expone que luego de dicha experiencia el demandante es una persona más retraída, introspectiva y luego de volver a Santiago, pasó por un proceso de quiebre familiar, con su señora e hijos, que lo afectó aún más.

Posteriormente, prestó declaración en estrado, don **Mario Enrique Rosales Ortega**, quien señaló que el 11 de septiembre de 1973 prestaba servicios como administrativo en la Subsecretaría del Trabajo y ahí conoció al actor, que era Jefe de Gabinete de la Subsecretaria del Trabajo. El día del golpe de Estado, al demandante lo sacaron a la fuerza de su puesto de trabajo y lo llevaron al Estadio Nacional, donde entiende que fue torturado.

Agregó que el resto de los funcionarios tuvieron que dejar el Edificio más tarde por la situación de violencia en el sector. Como sabía dónde vivía el actor, fue a preguntar por él a su domicilio, enterándose que había sido trasladado al Estado Nacional y que se encontraba vivo. Tiempo después supo que había sido dejado en libertad y lo visitó, enterándose que había sido maltratado y que sufrió apremios físicos, entendiendo que debe ser compensado.

Precisó no tener antecedentes precisos de las secuelas físicas, pero a nivel emocional y material, el actor quedó sin trabajo, no recibió ninguna indemnización y tuvo que trabajar informalmente para sobrevivir en Dictadura.

**Décimo noveno:** Que, con la prueba testifical rendida, analizada y valorada conforme las reglas establecidas en el artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que han prestado declaración dos testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que dieron razón de sus dichos, dicho testimonio constituirá plena prueba, al no haber sido desvirtuada por otra en contrario, en cuanto a tener por acreditado que el actor efectivamente prestaba sus servicios en la Subsecretaría del Trabajo al momento del Golpe de Estado, siendo detenido ilegalmente y trasladado al centro de detención ilegal del



Estadio Nacional, donde recibió apremios ilegítimos por parte de Agentes del Estado, siendo puesto en libertad, posteriormente. Sin embargo, las vivencias del actor le produjeron menoscabos y daños psicológicos, quedando más retraído e introspectivo.

**Vigésimo:** Que conforme lo establece la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, tortura es *“Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, que sean inherentes o incidentales a éstas”*.

**Vigésimo primero:** Que las consecuencias psicológicas derivadas de la tortura varían según la gama de situaciones vivenciadas, pasando desde cuadros reactivos inmediatos hasta consecuencias de más largo plazo. Los efectos son principalmente sentirse inseguros y atemorizados; humillados, avergonzados y culpables; deprimidos, angustiados y desesperanzados, además de alteraciones de la concentración y de la memoria; presencia de conflictos, crisis y rupturas familiares, así como a problemas de pareja; pérdida de grupos de referencia y de redes sociales; tristeza y sentimientos depresivos que reaparecen a propósito de fechas significativas asociadas con estos sucesos; trastornos del sueño e insomnios crónicos; inhibiciones conductuales, fobias y temores (v. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Consecuencias de la prisión política y la tortura, Capítulo VIII).

Conforme lo establece el Colegio Médico de Chile *“El dolor físico profundo, implica que el cuerpo torturado está intervenido; sus funciones inhibidas y que el contenido de la conciencia - aquellos pensamientos y afectos por lo que el sujeto se mantiene querido y valorado- ocasionalmente pueden ser destruidos. El dolor físico, adquiere una real similitud con la*



*muerte en su dimensión de experiencia psíquica, es decir, los territorios donde la tortura es ejercida tanto física como psíquicamente se transforman en uno: cuerpo dañado y vivencia menoscabada bajo una amenaza representada con carácter similar a la muerte” (Pizarro Céspedes, Angélica, “Tortura y Trama: Consecuencias, Valoración del Daño”, Colegio Médico de Chile).*

**Vigésimo segundo:** Que la detención ilegal, los tormentos, agresiones físicas y psicológicas a las que fue sometido el actor, en el tiempo que fue detenido por agentes del Estado, a la luz de la definición conceptualizada en el motivo vigésimo, sin lugar a dudas es que debe ser calificada como tortura y sobre la base de ello han de analizarse los presupuestos de la responsabilidad demandada.

Por otro lado, la acción por parte de dichos agentes se encuentra debidamente asentada en el Informe Valech I y los demás antecedentes probatorios acompañados y analizados precedentemente.

Asimismo, no resultó ser un hecho negado por parte de la demandada, la circunstancia de la detención y los apremios ilegítimos recibidos por el demandante, lo que permite darle un mayor valor a la existencia de los tormentos recibidos por este último.

**Vigésimo tercero:** Que, así las cosas, con los hechos asentados a partir de la prueba documental y testifical rendida, permiten tener por acreditado el daño psicológico y moral experimentado por el actor, desde que tuvo por objeto la tortura y la degradación de su persona, con el objeto de obtener la información pretendida.

Por su parte, con el mérito de la declaración testifical de los deponentes, queda en evidencia que existe un nexo causal entre la acción desplegada por los agentes del Estado que detuvieron al actor y lo sometieron a torturas, con el daño que hasta el día de hoy se encuentra vigente, no obstante haber transcurrido casi 50 años de tan lamentables episodios.

**Vigésimo cuarto:** Que, previo a determinar la procedencia de la indemnización y su *quantum*, cabe hacerse cargo, previamente, de las alegaciones de pago y prescripción hechas valer por el Fisco de Chile.





**Vigésimo quinto:** Que respecto de la excepción de pago planteada por el Fisco de Chile, dicha resistencia se basa en que la Ley N°19.123 establecería beneficios pecuniarios para los familiares de víctimas de derechos humanos cuyo objetivo sería el de indemnizar justamente el daño por ellas sufrido a consecuencia de actos lesivos desarrollados por agentes del Estado.

Lo anterior importa analizar la naturaleza jurídica de los beneficios contemplados en la referida ley, para luego verificar si respecto de ello concurren los presupuestos del pago invocado.

Que la historia fidedigna de la Ley N°19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley, según lo dispone el inciso segundo del artículo 19 de Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella.

El Senador Máximo Pacheco, refiriéndose a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sostuvo que la misma *“entendió por reparación un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. La reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena; ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro de los chilenos. Es verdad que la desaparición de o la muerte de un ser querido constituyen pérdidas irreparables; por lo que no es posible establecer una correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas, con las medidas que se proponen. No obstante ello, la reparación moral como material, parece ser una tarea absolutamente necesaria para el afianzamiento de una democracia plena”*.

Por su parte, interviniendo el Ministro de Estado señor Correa, a la época, Secretario General de Gobierno, expresó que *“El informe de la*



*Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, concordante con el mandato del Presidente de la República, presentó al país el cuadro de una situación desgarradora (...) y ha informado (...) del dolor de todos, sin mirar el color de los que murieron por violaciones a los derechos humanos y de quienes murieron por violencia política” y agregó que “El reconocimiento de responsabilidades, la administración de justicia por tribunales competentes –de acuerdo a la ley vigente- y la reparación parcial del daño, son las obligaciones que han debido asumir –y deben seguir haciéndolo- los Poderes Públicos y las dirigencias políticas, sociales, religiosas y humanitarias. El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala se inscribe en ese propósito. Por un lado establece compensaciones y pensiones para los familiares directos de las víctimas y, por otro, encarga a una corporación de alto nivel, designada por el Presidente de la República y con acuerdo del Senado, el cumplimiento, por un tiempo fijo, de las labores de asistencia y apoyo a aquéllos, así como de la ejecución de las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en orden a complementar antecedentes en los casos en los que ella no se formó convicción”.*

Es en este contexto, tal como lo exponen las autoridades citadas, que se presenta el proyecto de ley que termina siendo aprobado y que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, la ley en análisis estableció una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

En relación con la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los



beneficios que se conceden, como por ejemplo, los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado precedentemente, es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N°19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

En este punto, conviene precisar que son numerosas las sentencias nacionales que afirman que entre nosotros rige el llamado “principio de la reparación integral o completa”, el cual ordena que la reparación que se decrete deba ser exactamente igual al daño sufrido.

En tal sentido se ha resuelto que la reparación “debe ser completa, igual al daño que se produjo, de tal forma que permita a la víctima reponer las cosas al estado en que se hallaban antes de la comisión del delito que la afectó; debiendo quedar su patrimonio como si el daño no se hubiera producido (v. C. Suprema, 10 de enero de 1985, en Rev., t. 82, sec. 4°, pág. 4. En el mismo sentido, C. Apelaciones de Santiago, 9 de mayo de 1985, Rev., t. 82 sec. 4°, pág. 151 y C. S., 10 de octubre de 1985, Rv., t. 82, sec. 4°, pág. 240).

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de la reparación integral encuentra su asidero en el artículo 2314 del Código Civil y, muy especialmente, en el inc. 1° del artículo 2329 de dicho cuerpo normativo que señala: *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

El profesor Ramón Domínguez Águila hace ver que para afirmar con propiedad si en un sistema jurídico se reparan efectivamente todos los daños es menester indagar sobre dos aspectos:

a) Cuál es la noción de daño que se tiene, y si dentro de ésta se cubren efectivamente todas las alteraciones a la situación existente antes del hecho dañoso (punto de vista cualitativo), y

b) Si en el hecho se reparan todos los daños sufridos, lo que, mirado desde el punto de vista de la indemnización pecuniaria, consiste en saber si “en equivalencia monetaria se hace pagar al hechor la integridad de



aquellos que en un cierto sistema se considera que son daños” (v. Domínguez Águila, Ramón, *Consideraciones en torno al daño en la responsabilidad civil. Una visión comparatista*”, en *Revista de Derecho, Universidad de Concepción*, N°136, 1966, pp. 136 y 137).

**Vigésimo sexto:** Que aclarado lo anterior, hay que precisar que la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que por este proceso civil se persigue y no resulta procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que la tutela judicial efectiva declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues pensar de otra manera, sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

Por lo anteriormente razonado, es que **se desestima la excepción de pago opuesta por el Fisco de Chile.**

**Vigésimo séptimo:** Que, en cuanto a la prescripción de las acciones civiles, afirma que desde la fecha de los hechos y aquella de interposición de éstas, han transcurrido con creces los plazos de cuatro o cinco años previstos en los artículos 2322 y 2515 del Código Civil, respectivamente.

Si bien, cuando se analizó la excepción de cosa juzgada se pudo advertir que dicha resistencia no se condice con la materia que es objeto del juzgamiento de autos, hay que precisar que la prescripción extintiva, en tanto institución jurídica, tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico en relación al derecho común.

Sin embargo, esta alegación debe ser rechazada para el caso *sub judice*, por cuanto el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual y ordinaria, de cuatro y cinco años, respectivamente, invocados por el Fisco de Chile no son aplicables en la especie, atendida la naturaleza y origen del daño cuya reparación ha sido solicitada, pues dichos plazos de prescripción, en esta clase de acciones, no ha de computarse, necesariamente, desde la ocurrencia del hecho que debe ser indemnizado, como es la regla general.



En concepto de este sentenciador, por tratarse de una violación a los Derechos Humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil en encuentra ínsito en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación y por ello, el legislador de antaño no los consideró, por cuanto sólo se representó criterios claramente ligados al interés privado, sin que fuera posible advertir situaciones de quiebres no sólo institucionales y del ordenamiento jurídico, sino también de crímenes que traspasan las barreras del derecho común.

Es por ello que, a modo de ejemplo, resulta pertinente citar los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en las que se previene que cuando ha habido una violación a los derechos humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

**Vigésimo octavo:** Que atendida la naturaleza de las normas citadas, en las que no se contempla un estatuto extintivo relacionado con el transcurso del tiempo, claramente, no es posible concebir la prescripción de la acción penal, lo que conduce a preguntarse qué podría justificar que este motivo de extinción de responsabilidad fuese adjudicado a la responsabilidad civil conforme con los extremos del Derecho privado, si la responsabilidad penal siempre será exigible.

La pregunta formulada busca la explicación acerca del motivo que justificaría enfrentar la responsabilidad penal a partir de criterios particulares propios de la naturaleza del hecho, y al mismo tiempo, ocuparse de la responsabilidad civil desde orientaciones válidas para otras materias. En este punto una primera aproximación interpretativa nos llevaría a concluir que, si donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición, es inconcuso que la responsabilidad civil debe asumir el mismo tratamiento que la punitiva.

Por otro lado, la cuestión de los Derechos Fundamentales constituye un sistema, y por tal razón, no es posible interpretar los hechos que los afecten y las normas que los regulan de una manera aislada, como tampoco pueden introducirse normas que sean consecuencia de otros criterios



orientadores vinculados a finalidades que exceden la naturaleza de esta clase de derechos, como son las que han sido invocadas por la demandada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias, necesariamente, será contraria al sistema jurídico de los Derechos Fundamentales.

El mismo Andrés Bello, al concebir las normas sobre interpretación de la ley, hizo presente en el artículo 22 del Código Civil que *“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.”*

*Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.*

Por lo mismo, no se advierte ninguna razón para hacer una distinción relacionada con la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad, con la imprescriptibilidad en materia de responsabilidad del Estado, derivada de la comisión de dichos ilícitos.

Por ello, ha de entenderse que la cuestión de la prescripción de la acción indemnizatoria, no puede ser resuelta con un enfoque plasmado en las normas del derecho privado, porque éstas atienden a fines diferentes y en pasaje alguno del Código Civil, se hace mención a los ilícitos relacionados con vulneración a los derechos humanos.

**Vigésimo noveno:** Que si por un minuto, aceptásemos la tesis de la resistencia opuesta por el Fisco de Chile, ciertamente, se vulneraría la citada norma de la Convención Americana de Derechos Humanos y, además, la del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho internacional, establece para los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que ha de situarse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos.

En este aspecto, no está demás hacer presente que las normas de derechos fundamentales han de ser interpretadas sobre la base del denominado principio *“pro homine”*, es decir, a favor de la persona humana, motivo por el cual, debe preferirse aquel ejercicio hermenéutico que tienda a dar protección y reparación integral a la víctima de la vulneración de un derecho fundamental por parte del actuar sistemático del Estado en orden a vulnerar los derechos humanos.



**Trigésimo:** Que, además, la demandada ha sostenido que es improcedente la indemnización pretendida, al haber sido ya reparados los perjuicios integralmente con compensaciones otorgadas en el marco de la justicia transicional, sea mediante transferencias directas de dinero, otras reparaciones simbólicas y/o satisfactivas, y que han sido parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se ha efectuado a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones.

Afirmó que lo pretendido fue entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir o morigerar el daño moral.

Asimismo, la demandada hizo referencia a la identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas. Así, concluyó que los esfuerzos del Estado para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencias de tales violaciones. Los referidos mecanismos de reparación han compensado parcialmente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Sobre el particular, si bien con la prueba rendida este sentenciador acepta el hecho que el actor está favorecido con la pensión referida, por la suma mensual de \$187.969, no puede hacerse lugar a una excepción de esa naturaleza, porque la ley que la previno no las estableció con carácter excluyente, de suerte tal, que no es posible concluir que por su otorgamiento son improcedentes las indemnizaciones que ahora se solicitan. Por lo mismo, no cabe sino rechazar tal alegación del Fisco de Chile.

**Trigésimo primero:** Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del cobro de reajustes e intereses, el Fisco de Chile plantea que éstos solamente pueden devengarse en la medida que la sentencia los acoja y la obligación se establezca, los que sólo podrán devengarse, para el evento



que se acoja la pretensión del actor civil, desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el representado de la defensa incurra en mora.

Sobre el particular, este sentenciador estima que este planteamiento es acertado, particularmente, porque este punto no ha sido reglamentado por el Derecho Internacional y por ello debemos recurrir a las normas del derecho común.

Es por ello que en relación con el cobro de los reajustes e intereses, los mismos se devengarán desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

**Trigésimo segundo:** Que, rechazadas las alegaciones y excepciones anteriores, hay que hacerse cargo de la cuantificación del daño moral, conforme a los perjuicios provocados y para establecerlo, se cuenta con la prueba establecida en considerando sexto de este fallo.

En este punto, únicamente se cuenta con la Ficha Valech que describe los hechos de que fue víctima el actor, aunado con las declaraciones contestes de los testigos de la demandante, que dan cuenta de las secuelas producidas luego de la detención del demandante.

No contando con un informe psicológico que diera cuenta de la magnitud real de la aflicción psicológica experimentada, no se puede desatender al informe general que se ha desarrollado para explicar las secuelas de las personas detenidas ilegalmente en el contexto de las vulneraciones a los derechos humanos. Menos se puede obviar que ambos testigos señalaron que hubo un cambio conductual del demandante, luego de su privación de libertad ilegal, señalando que sufrió tormentos por parte de agentes del Estado.

Conforme a los antecedentes antes analizados, es evidente que en contextos de abuso y vulneración de Derechos Humanos, emerge un concepto e institución fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Daño Moral, bajo la dimensión del *pretium doloris*, institución que es concebida por nuestra jurisprudencia como las aflicciones, pesares, molestias y sufrimientos que experimenta una persona como consecuencia





de maniobras de tortura, maltrato físico y psicológico, considerados hechos ilícitos que deben ser indemnizados.

Sobre la base de lo anterior y dadas las secuelas producidas por los hechos ilícitos que lamentablemente vivenció el actor con ocasión de las torturas de que fue víctima y que fueran descritas en extenso en este fallo, este sentenciador estima prudente y de justicia regular el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos), suma que se condice estrictamente con las circunstancias lesivas establecidas en el proceso y sus secuelas posteriores.

**Trigésimo tercero:** Que en cuanto a la petición subsidiaria de rebaja del monto pedido, fundado en los parámetros establecidos por otras sentencias en la materia, deberá estarse a lo resuelto, máxime considerando que el monto fijado se adecua a los baremos que ordinariamente se fijan por los tribunales superiores para casos como el de marras.

**Trigésimo cuarto:** Que la suma ordenada pagar en el motivo trigésimo segundo se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el periodo que va entre que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada el pago efectivo.

En el mismo período, las sumas referidas devengarán interés corriente.

**Trigésimo quinto:** Que atento lo resuelto y siendo acogida la demanda en su parte esencial, se condena al Fisco de Chile al pago de las costas del juicio por haber resultado vencida.

Por estas consideraciones, normas legales e internacionales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil **se decide:**

I. Que **se rechaza**, en todas sus partes, la excepción de cosa juzgada planteada por el Fisco de Chile;

II. Que, se acoge la demanda interpuesta por don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, en representación de don **Luis Rafael Venegas Cortés** en contra del **Fisco de Chile** y en consecuencia, se condena a la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JGWNXXFBXBG

demandada a pagar por concepto de indemnización por daño moral la suma de **\$30.000.000** (treinta millones de pesos), conforme lo establecido en el motivo trigésimo segundo;

**III.** Que en cuanto al planteamiento subsidiario formulado por el Fisco de Chile, ha de estarse a lo resuelto en el romano precedente.

**IV.** Que la suma ordenada pagar lo será conforme a los reajustes e intereses establecidos en el motivo trigésimo cuarto.

**V.** Que **se condena** en costas al demandado.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

**Rol N°C-5059-2020.**

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, siete de julio de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JGWNXXFBXBG